

Reportaje Agua

Privatización

DEMASIADOS INTENTOS. La escasez de fondos y los contratos que ofrecen las multinacionales ha llevado a ayuntamientos como el de Zaragoza a sopesar la idea de privatizar la red de abastecimiento (no prosperó). Habría recibido más de 50 millones de euros, a cambio de que una multinacional se encargara del sistema durante 40 años. En Madrid ya es privada la gestión del Canal de Isabel II y la Generalitat de Cataluña busca privatizar las desaladoras.

Venta de agua

MERCADEO. La nueva Ley de Calidad Ambiental ha permitido abrir el negocio de venta de agua entre los regantes. Si antes la Confederación podía retirar la concesión a un regante que no utiliza el recurso, ahora se puede vender ese agua incluso a regantes de otras cuencas. Esto abre un peligroso camino para posibles trasvases, donde el agua es un bien privado que puede venderse.

FLUYE EL NEGOCIO

El Ministerio de Agricultura prepara una ley que abrirá la puerta al capital privado en la gestión del agua de uso urbano. Zaragoza ya intentó privatizar su saneamiento, y la mitad de las depuradoras aragonesas están gestionadas por multinacionales

Reforma

EL MINISTERIO SE PREPARA. El Gobierno de Mariano Rajoy reformará la gestión del agua de uso urbano, y el Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado un anteproyecto de ley para regular el sector de forma conjunta. Preparan un regulado dependiente y confían que España reciba inversiones que superen los 15.000 millones. También se ha anunciado un gran «pacto hidrológico» de agua entre cuencas. Es decir, se resucita el trasvase.

E

sta semana se entregaron en Bruselas 1,6 millones de firmas de más de 70 organizaciones de 13 países, entre ellos España. Se trata de la primera iniciativa ciudadana que busca garantizar el agua como derecho para todos. Y ahora, la Comisión deberá decidir si al agua se le pueden aplicar las normas del mercado interior o bien los servicios podrán ser liberalizados. «En países como España, el agua ya se ha convertido en un bien que puede comprarse y venderse. Y el suministro de algo tan necesario es el negocio que buscan muchas multinacionales», advierte Mariano Mérida, portavoz de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), organización que junto a Marea Azul y otros colectivos han denunciado en los últimos años la «creciente privatización de los servicios de agua en Aragón».

No es una compraventa al uso. A diferencia de países como Chi-

le, donde los ríos se vendieron literalmente a una compañía energética, o Reino Unido, que vendió su servicio de saneamiento porque no podía acometer las reformas necesarias, «aquí se ha optado por un sistema más opaco y difícil de detectar, donde se deja en manos privadas la gestión y funcionamiento de redes de abastecimiento o depuradoras». Y Mariano Mérida advierte de que el proceso, además, lo estamos pagando los aragoneses, «en nuestros recibos del agua. El precio que pagamos por la depuración se ha encarecido un 135% desde 2005». Y para lograr una mayor presión, RAPA acudió el pasado noviembre al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para pedir que vigile la financiación solicitada por la DGA para el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, porque está «colapsado y las entidades financieras y los propios concesionarios exigen un aumento de pa-

gos bajo la amenaza de abandonar los servicios». Confían en que la falta de dinero «arroje luz a un plan opaco del que dan muy poca información. Es un plan de privatización encubierto, con más de la mitad de las depuradoras en manos de empresas privadas». Los cambios a finales de 2013 de la Ley de Calidad Ambiental, que permite a los agricultores vender las aguas excedentarias, y el anuncio del Ministerio de Agricultura de la reforma de la gestión del agua para atraer inversión ha puesto en alerta a otras organizaciones del resto de España, que se han unido a la iniciativa ciudadana que advierte a Bruselas del problema.

SIN RECURSOS

Lo que colectivos como Marea Azul o RAPA llaman «privatización» se considera en la Administración una solución acertada. «El Plan de Depuración es una necesidad, que nace de la directiva comunitaria de 1991. Los municipios aragoneses se vieron obligados a contar con instalaciones para depurar el agua antes de 2005, sin re-

Gestión

EL MODELO FRANCÉS. La entrada de capital privado para construir nuevas redes o gestionar las existentes es habitual en Francia, y cada vez más a menudo en España. Aragón ya tuvo que confiar la construcción de decenas de depuradoras a empresas privadas para poder cumplir con los objetivos que marcaba Bruselas en tratamiento de aguas. En estas sociedades mixtas la decisión la toman los organismos públicos, pero se dan casos de sobrecostes.

Impuestos

SUBEN LOS RECIBOS. En 1991, la UE estableció que «quien contamina paga», y obligó a los Estados a crear un impuesto que grave los vertidos ciudadanos. Primero se llamó canon de saneamiento, y ahora impuesto sobre la contaminación de las aguas. Ha subido más de un 135% en los últimos siete años, y con él se paga el complicado proceso de saneamiento que la UE obliga a cumplir.

«Desde 2005, el impuesto por saneamiento ha subido en los recibos un 135%»

Una nueva ley permite al agricultor vender al agua sobrante, como si fuera un banco

En Europa

DOS CORRIENTES. En Europa existe el modelo británico, que Margaret Thatcher impuso en Londres, y que privatizó por completo el sistema de abastecimiento: ahora es propiedad de Thames Water. En Francia se ha potenciado el sistema mixto de gestión. Pero cada vez surge con más fuerza la 'remunicipalización', el retorno a manos públicas de estas redes. Ha pasado en París y Berlín.

Texto
DAVID NAVARRO

cursos para ello. Así que la DGA entendió que debía asumir esa responsabilidad; se firmaron convenios y cedieron sus competencias», describe Antonio Cajal, director del Instituto Aragonés del Agua (IAA). Una parte la financió el Gobierno de Aragón, «pero hacían falta 171 por construir, sin contar el Pirineo. Y no disponíamos de recursos, así que recurrimos a la colaboración privada». Aragón se dividió en 13 zonas, y la empresa privada que construye las plantas asume la gestión durante 20 años y cobra el metro cúbico que depura. «Aún faltan por hacer —señala Cajal—. Queda la zona 3 (La Litera y parte del Somontano), la zona 10 (pueblos del Matarraña) y la depuradora de Utebo. Para el Pirineo faltará más tiempo, son 297 instalaciones que también contarán con inversión privada. A esto se suman instalaciones para otros 1.000 núcleos.

Para afrontar la carga económica que supone la construcción y mantenimiento de esta red, el Gobierno de Aragón aprobó en 1997 un impuesto, el llamado 'canon de saneamiento' o 'impuesto sobre la contaminación de las aguas'. Y es-

te es uno de los mayores puntos de fricción entre colectivos, pequeños pueblos y Gobierno de Aragón. Porque hay cientos de localidades aragonesas que están pagando este impuesto sin tener una depuradora en marcha, y ciudades como Zaragoza —que ha pagado durante 20 años su propia depuradora—, tendrá que abonarlo a partir de 2016. «Es un error que algunos se empeñan en mantener —asevera Cajal—. Porque no es un impuesto que se paga por tener depuradora, sino porque cada persona produce residuos. Se trata de un impuesto solidario, para que ningún aragonés pague más por metro cúbico depurado que otro. De no existir ese impuesto, un ciudadano de una localidad pequeña debería pagar una gran cantidad, para amortizar su depuradora, mientras que el de una capital apenas lo notaría. El impuesto además se calcula según el agua que utiliza la persona, porque se entiende que esa misma agua será vertida de nuevo».

Pero Marea Azul y RAPA no coinciden con Antonio Cajal. En un escrito, Pedro Arrojo, profesor emérito del Departamento de

Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, criticaba el «sobredimensionamiento de las obras», la «inadecuada selección tecnológica en las depuradoras de pequeños pueblos», cuya complejidad y precio aporta beneficios a la empresa privada. Y pone como ejemplo la «desmesura de precios que se impone a la gente a través de los recibos». Según Arrojo, un metro cúbico de la depuradora de La Almozara (amortización y gestión incluido) cuesta 0,15 euros; en La Cartuja (privada) el mismo cuesta 0,31 euros. «Y en las depuradoras privatizadas del Plan de Saneamiento de Aragón la media es de 1,3 euros el metro cúbico».

INTENTOS FALLIDOS

Desde el IAA recuerdan a los colectivos que las depuradoras se hicieron «de acuerdo a una medición de caudales y a las proyecciones de población de cada localidad. Si alguna está sobredimensionada es porque su Ayuntamiento creyó que la población crecería —como ha ocurrido en Zuera, donde ahora la depurado-

ra apenas funciona al 12% de su capacidad—. Y es el caso también de Utebo, que preveía contar con más población. Afortunadamente, en este caso, no se había comenzado a construir y se ha podido rediseñar». Y Cajal recuerda que «aunque la gestión se saque a concurso, el control es público al 100%. Todas las depuradoras son controladas por el IAA, que es quien establece los precios. ¿Cómo pueden pretender que la gestión sea pública, en cualquier caso? Haría falta muchísimo personal, no sería viable».

Mariano Mérida vincula la política de austeridad de la UE con la creciente privatización de servicios. «Por ley, un ayuntamiento no puede endeudarse, pero tiene que acometer muchísimas mejoras en su red, además de construir nuevos sistemas, cambiar los que han quedado obsoletos... En Zaragoza, ha habido más de un intento fallido de ceder la gestión del sistema de saneamiento a una empresa privada. La última vez, en 2012». El objetivo era obtener liquidez a cambio de ceder el servicio a una multinacional. «Unos 50 millones de euros, a cambio de

que una empresa privada se encargue durante 40 años de la gestión. Es el llamado 'modelo francés', de gestión mixta. Ecociudad Zaragoza controla el 51% y la multinacional el 49%. Y hasta aquí parece que todo está bien, que el organismo público tiene la mayoría. En realidad, es la ciudad la que sale perdiendo, más allá del servicio. Porque esa multinacional tiene su propio sistema informático, su propio equipo de mantenimiento, su tecnología... y los beneficios que supone mantener y construir la red se van fuera de Aragón, incluso de España».

Marea Azul y RAPA piden más diálogo, «que escuchen más allá de sus propios intereses —resume Mérida—. Ahora van a hacer una depuradora en Utebo. Si la de La Cartuja funciona a menos del 70% de su capacidad, ¿por qué no llevar hasta allí los vertidos? Y de paso, con el dinero que se ahorran, pueden cambiar el colector de Echegaray y Caballero, en Zaragoza, que se colapsa con las tormentas y arroja al Ebro todo tipo de residuos. Pedimos otra política, más racional y lógica, para que todos salgamos ganando».